

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

AUTO INTERLOCUTORIO No. _____

Santiago de Cali, dieciocho (18) de agosto de dos mil veinte (2020).

MAGISTRADO PONENTE: OSCAR SILVIO NARVÁEZ DAZA

MEDIO DE CONTROL:	Reparación directa
EXPEDIENTE:	76001 23 33 009 2019 00266-00
DEMANDANTE:	Ángel Octavio Posada Echavarría y otros.
DEMANDADO:	Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la Nación.

AUTO QUE DECLARA FALTA DE COMPETENCIA POR FACTOR CUANTÍA

En orden a declararse sin competencia para conocer del presente asunto, el Despacho se permite exponer las siguientes:

CONSIDERACIONES

El señor Ángel Octavio Posada Echavarría, Carlos Arturo Posada Sierra, Heber de Jesús Posada Sierra, María Yaned Posada Sierra, Marian Nancy Posada Sierra, Marlen Posada Hernández, Yomaira Posada Sierra y en representación de su hija Adriana Lucia Vargas Posada, María Yolanda Posada Sierra y en representación de su hijo Gustavo Adolfo Londoño, Yenny Carolina Duque Posada, Mónica Alexandra Posada, Marlon Yohan Quintero Posada, Cristian David Posada Sierra, Luis Eduardo Quintero Posada, Erika Yuliana Duque Posada, Julián Andrés Posada de la Pava, Jersson Leonardo Álvarez Posada, Jorge Armando Quintero Posada, Nesly Dahiana Quintero Posada, Angie Tatiana Quintero Posada, Jessica Alejandra Mosquera Posada, Jeison Alexander Mosquera Posada y Maycol Andrés Mosquera Posada, por intermedio de apoderado judicial demandaron ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para que a través de control de Reparación Directa (artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA), se declare la responsabilidad de la Nación - Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios materiales y morales, en razón de la privación injusta de la libertad del señor Ángel Octavio Posada Echavarría, en consecuencia se condene a pagar a los demandantes dichos perjuicios.

Cabe resaltar de antemano que según el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo), para efectos de fijar la competencia por razón de la cuantía, al alegar la parte demandante, en el presente asunto, el reconocimiento de perjuicios materiales y morales, solo se tendrán en cuenta los primeros.

Así las cosas, en cuanto a lo expuesto, la parte actora relaciona los perjuicios materiales (lucro cesante) de la siguiente manera (folio 22):



“LIQUIDACION LUCRO CESANTE

Normalmente la liquidación de lucro cesante comprende un periodo causado o consolidado y un periodo futuro o anticipado, sin embargo, la doctrina ha considerado que en casos como el que nos ocupa, solo se debe reconocer el lucro cesante causado o consolidado, porque “la víctima va a quedar en las mismas condiciones lucrativas que tenía antes de ocurrir el daño, sea colocando el dinero a intereses, sea montando una nueva empresa”. No habrá pues, período futuro o anticipado.

Para Realizar el Lucro cesante causado o consolidado se aplicará la siguiente fórmula:

$$S = Ra. \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

Donde:

S= Es la suma o indemnización que se busca.

Ra.= Que es la renta o ingreso mensual que deja de recibir el perjudicado, es decir, un millón de pesos (1.000.000.00),mcte.

i= interés puro o técnico, cuyo valor corresponde a 0.004867.

n=número de meses indemnizables, es decir, el tiempo corrido desde la fecha de la privación injusta de la libertad, tres (3) de octubre del año dos mil seis (2006) y el veintinueve (29) de julio del año dos mil once (2011)”

Y al determinar la cuantía, la parte actora preceptúa lo siguiente (folio 27):

*“la estimo el **CIEN (100) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES por concepto de PERJUICIOS MORALES**, y éste, a la fecha de presentación de esta solicitud (año 2019), tiene un valor de **OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO DIECISEIS PESOS (\$828.116.00)** mcte, mensuales, lo que multiplicado por 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, arroja como resultado la suma de ochenta y dos millones ochocientos once mil pesos (82.811.600.00) mcte., que es el valor de la mayor pretensión formulada en la demanda, por cada año ocasionado tanto a **ANGEL OCTAVIO** como a sus familiares demandantes, a lo que se le suma el valor dejado de percibir por parte de **ANGEL OCTAVIO** por concepto de salarios, desde el momento en que fue detenido, y hasta cuando fue dejado en libertad, tomando como base para esta última suma un salario de **un millón de pesos (\$1.000.000.00)** mcte., que era lo que devengaba mensualmente el mencionado al momento de ser detenido.*

Es así entonces, que la ley fija la competencia de los distintos jueces y tribunales de la República para las diversas clases de procesos, atendiendo, entre otros, al factor funcional, objetivo, subjetivo y territorial, esto es, a su naturaleza, a las pretensiones, a la calidad de las partes y al lugar donde debe ventilarse el proceso.

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagró la competencia de los Tribunales Administrativos de la siguiente manera:

*“**Artículo 152.** Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
(...)*

6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”



En este orden de ideas, a fin de determinar la competencia por razón de la cuantía de los asuntos sometidos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, dispuso:

*“**Artículo 157:** Competencia por razón de la cuantía. Para efectos de competencia, cuando sea del caso, la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen. En asuntos de carácter tributario, la cuantía se establecerá por el valor de la suma discutida por concepto de impuestos, tasas, contribuciones y sanciones.*

Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor.

En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento.

(Negrilla y subrayado fuera de texto).

De la norma antes citada, se deduce que la estimación de la cuantía para determinar la competencia del Tribunal Contencioso Administrativo en primera instancia, en procesos de reparación directa, se establece de acuerdo con la pretensión mayor de la demanda, esto es, que la pretensión más alta, debe superar los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Descendiendo la anterior normativa al caso en concreto, donde se pretensión elevada en la demanda por perjuicios materiales - lucro cesante, misma que fija la competencia, no asciende a más de 500 salarios mínimos del año 2019, es decir a más de cuatrocientos catorce millones, cincuenta y ocho mil pesos, pues el demandante advierte que ganaba un millón de pesos al momento de ser detenido desde el 3 de octubre de 2006 hasta el 29 de julio de 2011, es decir cincuenta y siete meses, veintiséis días, pues realizando una sumatoria rápida serían casi sesenta millones de pesos, más la indexación de estos no alcanzando dicho valor los 500 salarios mínimos exigidos según el numeral 6º del artículo 152 del CPACA, para que esta Corporación pueda conocer el asunto en primera instancia.

Desde esa perspectiva, esta Judicatura estima que carece de competencia para conocer del presente asunto en primera instancia y que la misma radica en cabeza de los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali.

DECISIÓN

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Administrativo del valle del cauca.

RESUELVE:

PRIMERO.- DECLARARSE sin competencia por el factor cuantía para conocer en primera instancia el asunto de la referencia.



SEGUNDO.- REMITIR el expediente a la Oficina Judicial, para que sea repartido entre los Juzgados Administrativos del Circuito de Cali.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Oscar Silvio Narvaez Daza', with a large, stylized flourish at the end.

OSCAR SILVIO NARVAEZ DAZA
Magistrado